**Amparo indirecto**

**Quejoso: Aquí va tu nombre completo**

**H. Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno.**

**P R E S E N T E.-**

Aquí va tu nombre completo, promoviendo por mi propio derecho, señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en la calle Aquí va tu domicilio completo. A su vez, autorizando para tales efectos a Aquí puedes poner el nombre de personas que todo el tiempo están en tu casa y podrían recibir documentos que envíe el juzgado, comparezco y expongo lo siguiente:

Que, con fundamento en la fracción I del artículo 103 y en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, comparezco a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a través del presente **juicio de amparo indirecto**. Así, para dar cumplimiento a los requisitos de procedibilidad establecidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, manifiesto lo siguiente:

1. **NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCER INTERESADO.**

No existe tercer interesado en el presente asunto.

1. **AUTORIDADES RESPONSABLES.**

Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

1. **ACTOS RECLAMADOS**.
2. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS se reclama la omisión de emitir una resolución a la solicitud de autorización sanitaria que la quejosa solicitó para consumo personal de Cannabis Sativa (Índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente “marihuana” o “cannabis”), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte.
3. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS se reclama la negativa fáctica e inminente a mi solicitud de autorización sanitaria que la quejosa solicitó para consumo personal de Cannabis Sativa (Índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10ª), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente “marihuana” o “cannabis”), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte.

Al respecto, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 548/2017, 548/2018 y 547/2017 ha considerado que cualquier tipo de prevención que exceda las facultades de la COFEPRIS, así como la omisión de respuesta es considerada como la aplicación implícita de los artículos 235, último párrafo, 236, 237, 245, fracción II, 247, 250 y 290, todos de la Ley General de Salud.

1. **ANTECEDENTES**

Bajo protesta de decir verdad, se manifiestan a continuación los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados:

1. El xx de xxx de 2019,acudí a las oficinas del Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS, con el objetivo de presentar un escrito libre para solicitar la autorización de consumo personal y lúdico de Cannabis, y demás actos correlativos: posesión, transporte en cualquier forma, empleo y uso, excluyendo los actos de comercio, como la distribución, enajenación y transferencia. De esta manera, un funcionario ingresó mi escrito libre para trámite y evaluación entregándome el comprobante de mi trámite (folio xxxxxxxxxxxxxxxxxx), adjunto a la presente demanda de amparo. Este comprobante de trámite no se encontraba debidamente fundado y motivado, por lo que no especificaba los plazos legales para la resolución de mi solicitud de autorización, sino que, simplemente, contenía un número telefónico (01 800 033 5050) y una página web ([www.gob.mx/cofepris](http://www.gob.mx/cofepris)) para la solicitud de informes.
2. El plazo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, aplicable por criterio de especialidad, para que la autoridad resolviera sobre mi trámite (40 días) venció el (día) de (mes) de 2019. Esa fecha llegó sin que hubiera resolución alguna.
3. A la fecha de la presentación de esta demanda de amparo indirecto, la autoridad sigue sin emitir una resolución de mi trámite. Ante esta falta de respuesta por parte de la autoridad responsable, acudo ante Usted C. Juez debido a que COFEPRIS aplica un sistema burocrático en el que a partir de la falta de respuesta ha configurado una serie de violaciones sistemáticas a mis derechos humanos, particularmente el derecho de petición consagrado en el artículo octavo constitucional y el libre desarrollo de la personalidad.
4. **POSICIONAMIENTO PRELIMINAR**

En el presente juicio de amparo se denuncia la omisión de COFEPRIS de responder la autorización sanitaria para el uso, consumo de cannabis por adultos en espacios privados y las conductas necesarias para materializarlo (incluida la adquisición), sin comprender los actos con fines de comercio ilícito y narcotráfico, esto constituye de facto un impedimento para el ejercicio de mi libre desarrollo de la personalidad y de mi disposición de mi derecho a la salud. De igual forma, se denuncia la inconstitucionalidad del procedimiento errático al que someten a quien suscribe.

La omisión de COFEPRIS no es, pues, un simple no hacer nada, es no realizar una acción que está en situación de poder hacer de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Insumos para la Salud. Todas las cualidades que constituyen la acción en sentido activo (finalidad y causalidad), están a disposición de COFEPRIS sujeto para poder hablar de omisión. La omisión administrativa es, entonces, la omisión de la acción esperada.

Sobre el particular es necesario considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto, que, en juicios, el amparo será procedente cuando el Juez advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total. En este sentido, la Corte considera que la abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso.[[1]](#footnote-1) Así, considera que para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso:

a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material;

b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta;

c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo;

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y,

e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no.

De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado. Conforme a lo anterior, a continuación, se analizan los requisitos para determinar si existe una dilación.

Ahora bien, de esta ausencia de respuesta a las solicitudes relacionadas con el consumo personal de cannabis, algunos jueces de distrito han adoptado el criterio acuñado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 548/2017, 548/2018 y 547/2017 en el que se ha considerado que cualquier tipo de prevención que exceda las facultades de la COFEPRIS, así como la omisión de respuesta es considerada como la aplicación implícita de los artículos 235, último párrafo, 236, 237, 245, fracción II, 247, 250 y 290, todos de la Ley General de Salud.

Aunado a lo anterior, la COFEPRIS ha declarado que continuará negando las solicitudes para consumo personal adulto de narcóticos. Esto a través de un comunicado oficial emitido por la autoridad en el cual reitera que, a pesar del amparo en revisión 237/2014 resuelto por la SCJN, la marihuana sigue siendo una sustancia ilegal y su siembra, cultivo, cosecha, transporte, venta y suministro está prohibida y penada por dicha Ley, por lo que seguirán negando las autorizaciones que se presenten. (anexo 2).

Tal y como sostiene la COFEPRIS en un comunicado, hasta el momento esta autoridad:

*“ha recibido 534 solicitudes para uso lúdico y personal de la marihuana, de las cuales 9 han sido autorizadas, en atención de mandatos del Poder Judicial, y 180 han sido desechadas; el resto de las solicitudes se encuentran en proceso de resolución. Es importante señalar que de ésas, 290 ya fueron prevenidas aún sin respuesta con un desistimiento y 57 en proceso de respuesta”.*

Es decir, la COFEPRIS ha recibido 534 solicitudes de autorización para consumo lúdico de cannabis y, sin embargo, las únicas autorizaciones que ha concedido esta autoridad son por orden judicial, todas las demás autorizaciones han sido desechas, son prevenidas, o bien, están “en proceso de respuesta”.

Bajo este contexto, de emitir la COFEPRIS una resolución a mi solicitud de autorización, (misma que, además, sería fuera del plazo legal), no cabe duda que la misma sería en sentido negativo. Además, como parte de esta política que se rehúsa a autorizar las solicitudes para consumo lúdico de Cannabis y continúa aplicando el sistema inconstitucional que prevé la Ley General de Salud, se advierte que la falta de respuesta de la COFEPRIS a mi solicitud de autorización para consumo de Cannabis constituye, en realidad, una negativa de facto a dicha solicitud. Por este motivo, la falta de respuesta de COFEPRIS conduce a negarme de facto la posibilidad de consumir cannabis de manera lúdica y demás actos necesarios para realizar el consumo y, en consecuencia, vulnera mi derecho a la privacidad y al libre desarrollo de la personalidad, así como mi derecho a la no discriminación mi derecho a la seguridad pública, mi derecho a la seguridad jurídica y mi disposición de mi derecho a la salud.

Cabe apuntar que de considerar únicamente la falta de respuesta de la autoridad cómo el acto reclamado, para efectos de que esta responda, esto propiciará la necesidad de presentar un amparo diverso, afectando las cargas de trabajo del poder judicial. Esto sería un despropósito, pues existen elementos suficientes para determinar que se denuncia la inconstitucionalidad de la imposibilidad de consumir cannabis de manera lúdica y demás actos necesarios para realizar el consumo. En este orden de ideas, se debe apuntar que existen criterios que reconocen la obligación del poder judicial para resolver el fondo del asunto, y no someter al quejoso a mayores requisitos.

***PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO FRENTE A FORMALISMOS PROCEDIMENTALES Y SOLUCIONES DE FONDO DE LOS CONFLICTOS. ÉSTAS DEBEN PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUÉLLOS, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS.***

*Durante mucho tiempo fue motivo de crítica para los tribunales de amparo que las sentencias protectoras se concedieran por aspectos formales o procedimentales y no por temas de fondo; lo cual motivó que mediante la expedición de la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece), se estableciera en su artículo 189 que los órganos jurisdiccionales de amparo procederían al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica, pero privilegiando en todo momento el principio de mayor beneficio; y fue en ese contexto que por reforma al precepto 17 de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, se adicionó a dicho dispositivo un tercer párrafo, en el que se puntualizó "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.". Por tanto, acorde con esa aspiración social y en estricto acatamiento a los artículos citados, en los juicios o en los procedimientos relativos, todas las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con la única limitante de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos.*

Finalmente, deseo hacer del conocimiento de su señoría que acudo a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión por mi propio derecho, sin contar con la asesoría de un profesional del derecho, por lo tanto, solicito de manera atenta y respetuosa que este procedimiento sea llevado en términos del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional, mismo que ordena privilegiar la solución de los conflictos planteados ante las instituciones jurisdiccionales sobre los formalismos procedimentales.[[2]](#footnote-2)

1. **SUPLENCIA DE LA QUEJA**

Es importante resaltar que al día de hoy se han resuelto cinco casos en el mismo sentido en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que dieron a luz a las siguientes tesis jurisprudenciales por reiteración aplicables de manera obligatoria para todos los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la ley de amparo.

* Registro No. 2 019 511. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA NECESARIA PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 64, Marzo de 2019; Tomo II; Pág. 1127. 1a./J. 25/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 356. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 489. 1a./J. 3/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 365. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 493. 1a./J. 10/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 381. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. ÉSTA PERSIGUE FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDAS. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 495. 1a./J. 7/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 382. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 496. 1a./J. 9/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 355. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 487. 1a./J. 5/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 356. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 489. 1a./J. 3/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 357 DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 491. 1a./J. 4/2019 (10a.).
* Registro No. 2 019 359 DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 492. 1a./J. 6/2019 (10a.).

Por lo tanto, solicito de manera atenta a este H. Juzgado, la aplicación de la suplencia de la queja en términos del supuesto contenido en el primer párrafo del artículo 79 constitucional, mismo que a la letra indica lo siguiente:

“Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;

…”

Finalmente, es importante señalar que la suplencia de la queja solicitada, de igual manera se encuentra acorde con la jurisprudencia vigente, misma que establece lo siguiente:

**SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.[[3]](#footnote-3)**

Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico.”

1. **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN**

**PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN: VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.**

Artículos violados: artículos 14, y 16 de la CPEUM; artículos 3, fracción II y 16, fracción VII, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud.

COFEPRIS determinó ilegalmente plazos diversos a los que está obligada conforme a la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud e incluso incumplió con dichos plazos. Los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponen a las autoridades administrativas la obligación de actuar exactamente conforme a las normas que las facultan en determinado sentido. De tal forma, existe una prohibición a la respectiva autoridad de que actúe de manera caprichosa o arbitraria. Así el este derecho a la legalidad impone a las autoridades administrativas la obligación de ceñir su actuar a lo que disponga la ley.

La doctrina, prácticamente de manera unánime, ha sostenido que cuando se está en presencia de licencias, permisos y autorizaciones se trata de actividades o áreas en las que el particular cuenta con un derecho previo pero que requiere para su realización, por distintas razones técnicas, de seguridad, de salud, de orden público o de interés social y otras, de un facultamiento específico de la autoridad competente para llevarlas a cabo. En este sentido, la ley otorga a las autoridades administrativas prerrogativas para decidir a su arbitrio respecto a su otorgamiento. Sin embargo, en un régimen de derecho, la facultad potestativa o discrecional que confieren las leyes, está subordinada a la regla general establecida por el artículo 16 constitucional.

De tal forma, los elementos reglados de un acto administrativo emitido conforme a potestades discrecionales consisten en: a) el propio margen discrecional atribuido a la administración (entendido como el licenciamiento o habilitación preconfigurada por la ley) y su extensión; b) la competencia para ejercer esas facultades; **c)** **el procedimiento que debe preceder al dictado del acto**; d) los fines para los cuales el orden jurídico confiere dichas atribuciones; e) la motivación en aspectos formales y de racionalidad; **f)** **el tiempo, ocasión y forma de ejercicio de aquéllas**; g) el fondo parcialmente reglado (personas, quantum, etcétera); h) los hechos determinantes del presupuesto; y, i) la aplicación de principios.[[4]](#footnote-4)

En este sentido, hay que considerar que el artículo 194 BIS de la Ley General de Salud establece que se consideran insumos para la salud: los medicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos. Por su parte, el artículo 235, fracción I, de dicho ordenamiento establece que el uso, consumo y, en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.

En lo que al presente argumento interesa, es necesario analizar lo referente al procedimiento que debe preceder al dictado del acto y el tiempo, ocasión y forma de ejercicio de las facultades discrecionales.

Conforme a lo anterior, resulta claro que COFEPRIS cuenta con facultades para emitir los permisos para uso y consumo de estupefacientes, y que estos permisos deben otorgarse conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Salud y los reglamentos que de ella emanen. Así, el Reglamento de Insumos para la Salud tiene por objeto reglamentar el control sanitario de los Insumos y de los remedios herbolarios, así como el de los Establecimientos, actividades y servicios relacionados con los mismos. Cabe reiterar que este mismo reglamento en su artículo 2 fracción XI. Insumos, a los Insumos para la salud a que se refiere el artículo 194 bis de la Ley. Es decir, todo procedimiento relativo al uso y consumo de estupefacientes debe seguir las reglas establecidas en este reglamento. De tal forma, el artículo 154 de dicho reglamento establece que cuando no especifique un plazo expreso para resolver sobre una solicitud, dispondrá de cuarenta días para ese efecto.

Tales condiciones resultan claras y obligan a las autoridades en esos términos. Existe una presunción de que los funcionarios de las instituciones son expertas y especializadas en sus respectivas facultades y procedimientos. Concebir lo contrario sería preocupante, pues indicaría que no existe profesionalización de las instituciones. De tal forma, existe la presunción de que los servidores públicos de COFEPRIS conocen, al menos, sus reglamentos y cuestiones relativas a procedimientos administrativos que tramitan. En este sentido, el hecho de que COFEPRIS actúe contrariando estas disposiciones no puede verse como resultado de un error en la aplicación de la norma. Es decir, la autoridad tiene toda la intención de aprovecharse de la complejidad del sistema que la regula y de la falta de experiencia de los ciudadanos, para emitir fallos fuera de los plazos en los que está obligada.

COFEPRIS, aunque sin fundamentarlo, parce recurrir al plazo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, sin tomar en consideración la materia del trámite respectivo, ni la regulación relativa. Sobre el particular hay que considerar que en la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea, estamos frente a una antinomia. Así, uno de los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, es el criterio de especialidad (*lex specialis derogat legi generali*) este ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). [[5]](#footnote-5) Así, en lo que al trámite que respecta a este procedimiento los plazos deben ser los de la regulación especial. Es decir, cuarenta días conforme a lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Todo parece indicar que la intención de COFEPRIS, al aplicar una regulación diversa a la que debería, tiene como finalidad que se actualice una negativa ficta y, así, evitar dar respuesta a quien suscribe. Es decir, es una artimaña para incumplir con sus obligaciones. Tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que para que se otorgue el mencionado efecto, debe estar expresamente previsto en la ley aplicable al caso. Es decir, para que en una solicitud o trámite -presentado ante una autoridad y cuyo cumplimiento por parte de ésta, se realiza fuera del plazo que determinan las leyes- se pueda obtener una respuesta presunta, en sentido negativo, con el fin de superar el estado de incertidumbre que se produce por esa omisión de la autoridad, requiere necesariamente encontrarse contemplada en la ley, de manera expresa o que se pueda deducir de su interpretación jurídica.

En este sentido, el reglamento de Insumos para la Salud reconoce la figura de negativa ficta para casos específicos. Así, los únicos supuestos en los que hace referencia a la negativa ficta es en los artículos 177, para obtener el registro sanitario de medicamentos biotecnológicos innovadores; y 177-bis 4, para el registro de medicamentos biotecnológicos biocomparables. Esto implica que la figura de negativa ficta no es aplicable al supuesto específico establecido en el artículo 154 del Reglamento de Insumos para la Salud. De esta manera, no existe disposición, ni se desprende por vía de interpretación jurídica alguna, que en el Reglamento de Insumos para la Salud se establezca que, si COFEPRIS no resuelve en el plazo de cuarenta días, las solicitudes de autorización sanitarias se considerarán negadas de manera ficta.

**SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: VULNERACIÓN AL DERECHO A LA CERTIDUMBRE JURÍDICA.**

Artículos violados: artículos 14, y 16 de la CPEUM; artículos 3, fracción II y 16, fracción VII, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud.

La autoridad responsable deja en estado de incertidumbre a los quejosos, pues los somete a un procedimiento en el que no informa los elementos a considerar por la autoridad, el estado de su procedimiento y los plazos en que resolverá. De igual forma, la misma configuración de los medios por los cuales el quejoso debería obtener información permite espacio para la discrecionalidad de la autoridad.

El artículo 16 de la Constitución Federal establece el derecho humano a la seguridad jurídica, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, así la autoridad debe sujetar sus actuaciones a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse.

En este sentido, la Suprema Corte ha sostenido que el principio de seguridad jurídica es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. Así, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. De tal forma, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.

Al respecto, la Suprema Corte, en la jurisprudencia 31/99,[[6]](#footnote-6) sostuvo que:

[…] las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, **son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan**. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión.

Sobre los alcances de dicho derecho, la Corte se ha pronunciado en la jurisprudencia 144/2006, que lleva por rubro y texto:

**GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES**. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.[[7]](#footnote-7)

Así, la seguridad jurídica radica en el “saber a qué atenerse” respecto la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Algún sector de la doctrina señala:

El reconocimiento del principio de seguridad jurídica entre «los derechos naturales e imprescriptibles del hombre» por parte de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ha tenido como lógica consecuencia conectar desde antiguo su estudio al nacimiento del Estado liberal de Derecho y, por añadidura, al conjunto de principios filosóficos, políticos y económicos que con base en el movimiento ilustrado conforman dicha concepción del Estado. **Entre estos principios, interesa destacar, desde un punto de vista jurídico, el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las frecuentes arbitrariedades y abusos del antiguo régimen. Lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza (aspecto positivo del principio de seguridad jurídica); y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado (aspecto negativo del principio de seguridad jurídica).**

En este orden de ideas, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en su artículo 3, establece los elementos y requisitos de todo acto administrativo. Así, en su fracción II, establece que es requisito que todo acto administrativo debe ser preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar. De igual forma, el artículo 16, fracción VII, de dicho ordenamiento obliga a la Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, a proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Esto implica que el gobernado debe tener claro todos los elementos a considerar, el estado de su procedimiento y los plazos en que la autoridad resolverá, desde que inicia el procedimiento. Esto es un deber legal impuesto a la autoridad, que no queda a su libre arbitrio o capricho, sino sujeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Sin embargo, COFEPRIS actúa de forma discrecional, errática y en completa opacidad. Esta autoridad carece de procedimientos estandarizados, y violenta las disposiciones establecidas en el la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud. Para demostrar lo anterior, a continuación, se narrará el suplicio que ha pasado quien suscribe para tramitar un permiso ante COFEPRIS. El (día) de (mes) de 2019, acudí a las oficinas del Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ubicadas en la calle Oklahoma 14, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. El objeto de dicha visita fue la tramitación de una autorización sanitaria para uso recreativo de cannabis en su modalidad de escrito libre.

Para iniciar este procedimiento necesitas pasar a un módulo de atención en el cual te cuestionan respecto al trámite a presentar y, con base en esto, te dan un turno. Tras esperar, es necesario pasar a un escritorio donde otro servidor público analiza la solicitud, y te da un comprobante de trámite. Al preguntar ¿cuál es el plazo de respuesta?, suelen decir que llames al número o ingreses a la página de internet que aparecen en el comprobante. Si presionas un poco los servidores públicos señalan que es un plazo de tres meses y en otros casos de cuarenta o sesenta días.

Al ingresar a la página web ([www.gob.mx/cofepris](http://www.gob.mx/cofepris)), es necesario entrar al apartado de ligas de interés, posteriormente al Centro Integral de Servicios y seleccionar Consulta de Resoluciones Disponibles. Una vez hecho esto, se despliega la página siguiente:



Al ingresar el número de trámite únicamente se despliega lo siguiente: (captura de pantalla de la consulta del FOLIO ante COFEPRIS).



Tal como se puede apreciar, este sistema no señala información relevante para los ciudadanos, pues se limita a indicar que el trámite está en evaluación. No indica nada relativo a los elementos a considerar por la autoridad, el estado de su procedimiento y los plazos en que la autoridad resolverá.

Resulta absurdo el procedimiento burocrático al que someten a los ciudadanos en esta dependencia, y que a la fecha no existe claridad sobre los plazos para la resolución, pues los métodos mediante los cuales supuestamente se puede obtener información sobre los trámites no funcionan. De tal forma, este procedimiento resulta violatorio al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues deja en una condición de incertidumbre sobre su situación ante el procedimiento para la obtención de un permiso.

**TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN: LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO PERSONAL Y RECREATIVO DE CANNABIS LIMITA AL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.**

Artículos violados: 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**El derecho al libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.**

El contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad se ha ido desarrollando en México por la vía de los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que deriva del derecho fundamental a la dignidad, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[[8]](#footnote-8) De acuerdo con la Corte, el artículo 1° constitucional, además de reconocer la igualdad de todas las personas ante la ley y prohibir todo tipo de discriminación, reconoce, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, el valor superior de la dignidad humana, ya que ésta se constituye como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, dentro de los que se encuentran el derecho a la vida, al honor, a la propia imagen y al libre desarrollo de la personalidad.[[9]](#footnote-9)

En el amparo directo civil 6/2008, la Corte sostuvo que el individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, es decir, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, resultan relevantes.[[10]](#footnote-10) En la misma sentencia, también se explicó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano como ente autónomo, por lo que supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de terceros, con la finalidad de cumplir sus metas u objetivos. En pocas palabras, es la persona humana quien puede decidir el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas o gustos.[[11]](#footnote-11)

La Corte ha mantenido una línea jurisprudencial en la que reconoce que el derecho al libre desarrollo de la personalidad da cobertura, en principio, a una gran variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el ejercicio de la autonomía individual.[[12]](#footnote-12) En el mismo amparo directo civil 6/2008, en el que se impugnó que se señalara expresamente en el acta de nacimiento de una persona transexual su cambio de sexo, el pleno de la Suprema Corte señaló que es en la *psique* donde reside el libre desarrollo de la personalidad jurídica, por referirse a las decisiones que proyectan la autonomía y la dignidad de la persona. La libertad protegida por el orden jurídico para garantizar el desarrollo digno de la persona se vulnera cuando a ésta se le impide irrazonablemente alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida y escoger aquellas opciones que den sentido a su existencia. Del respeto al pluralismo, se desprende el libre desarrollo de la personalidad, reflejado en el marco de protección constitucional que permite la coexistencia de las formas más diversas de vida.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, por la que el Procurador General de la República impugnó el reconocimiento legal del matrimonio igualitario en el entonces Distrito Federal, la Corte sostuvo que la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, responde a un elemento relevante de su proyecto de vida, que incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo, por lo que, tratándose de personas homosexuales, de la misma manera que ocurre con las heterosexuales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no. En tal sentido, en respeto a la dignidad humana, resulta exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las modalidades que decida adoptar, razón por la cual, la decisión tomada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ampliar la institución del matrimonio y comprender a las parejas del mismo sexo, lejos de contravenir con los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, los refuerza.[[13]](#footnote-13)

A su vez, al resolver un caso sobre la constitucionalidad del divorcio sin expresión de causa en el estado de Hidalgo, el amparo directo en revisión 1905/2012, la Corte defendió la postura de que la existencia del divorcio sin expresión de causa, además de evitar afectaciones al desarrollo psicosocial de los integrantes de una familia, contribuye al bienestar de las personas y a su convivencia constructiva. Al respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, señala la Corte, la ley reconoce que la voluntad del individuo es preponderante cuando ya no desea seguir vinculado a su cónyuge, en virtud de que ésta no está supeditada a explicación alguna sino simplemente a su deseo de con continuar con dicho vínculo.[[14]](#footnote-14)

En el amparo directo en revisión 3319/2015, la Corte sostuvo que la decisión de comenzar un concubinato, permanecer en él o darlo por terminado forma parte del plan de vida elegido de manera autónoma por una persona, en virtud de que cualquiera de estas decisiones entra en el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por esta razón, la exigencia de una declaración judicial como requisito necesario para darlo por terminado implica una restricción desproporcionada a este derecho humano, ya que dicha exigencia desplaza completamente la voluntad de los concubinos para ser reemplazada por el reconocimiento y declaración del Estado a través de una autoridad judicial.[[15]](#footnote-15)

De esta manera, decisiones anteriores tomadas por la Suprema Corte han reconocido el derecho al libre desarrollo de la personalidad y determinado su alcance, siendo en el amparo en revisión 237/2014[[16]](#footnote-16) donde, por primera vez, la Corte reconoció que este derecho abarca la protección del consumo personal de marihuana para fines lúdicos y recreativos. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad busca la protección de la “esfera personal del individuo”, lo cual implica salvaguardar las libertades que no son las más tradicionales, como la libertad de expresión o la libertad de asociación. En línea con lo sostenido por la Primera Sala de la Corte:

El derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un "área residual de libertad" que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. En efecto, estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos "espacios vitales" que, de acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; sin embargo, cuando un determinado "espacio vital" es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad.[[17]](#footnote-17)

De esta manera, **la Suprema Corte ha reconocido que la decisión personal tomada por una persona adulta de consumir estupefacientes en espacios privados, se encuentra protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad**. Lo anterior es así, ya que la decisión de tener experiencias sobre los pensamientos, las emociones o las sensaciones del individuo, mediante el consumo lúdico de alguna sustancia, sin duda, forma parte de la esfera más íntima y personal del individuo.[[18]](#footnote-18) Consecuentemente, tal decisión debe ser libre de las interferencias del Estado o de terceros. En caso contrario, el Estado estaría asumiendo una actitud paternalista que pretende sujetar a los individuos respecto de sus decisiones y su proyecto de vida, afectando la esfera más íntima del individuo al pretender imponer cuáles son las actividades recreativas que el individuo tiene permitido o no realizar.

Por este motivo, el procedimiento al que someten al que suscribe y la omisión de COFEPRIS a responder mi solicitud de autorización para el consumo lúdico de marihuana restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas, al impedir que las mismas puedan realizar dicho consumo y todas las actividades necesarias para llevar a cabo el consumo personal de la sustancia, en violación del artículo 1º constitucional.

**CUARTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: LA OMISIÓN DE RESPUESTA A MI AUTORIZACIÓN PARA CONSUMO PERSONAL Y RECREATIVO DE CANNABIS CONSTITUYE DE MANERA IMPLÍCITA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 235, ÚLTIMO PÁRRAFO, 236, 237, 245, FRACCIÓN II, 247, 250 Y 290, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y, POR LO TANTO, VULNERA MI DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.**

Artículos violados: Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La omisión de respuesta a mi solicitud de autorización para consumo personal y recreativo de cannabis vulnera mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, en un primer momento, debido a que como ya lo ha reconocido la SCJN al resolver el amparo en revisión 548/2018, COFEPRIS realiza una serie de actos que implican la aplicación implícita de los artículos 235, último párrafo, 236, 237, 245, fracción II, 247, 250 y 290, todos de la Ley General de Salud; ya sea a través de desechamientos, prevenciones ilegales u omisiones de respuesta como ocurre el día de hoy, la COFEPRIS vulnera mi libre desarrollo de la personalidad.

Lo anterior, en razón de que este derecho protege la decisión de consumir cannabis para fines meramente lúdicos en espacios privados y por personas adultas, de conformidad con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), frente a las interferencias del Estado como de terceros.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende del derecho fundamental a la dignidad humana, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este derecho al libre desarrollo de la personalidad protege frente a interferencias del Estado como de terceros, la “esfera personal” que no encuentra salvaguardada por las libertades más tradicionales y concretas, como la libertad de expresión y de asociación. Asimismo, este derecho comprende dos dimensiones, una externa y otra interna.[[19]](#footnote-19) Por un lado, la dimensión externa del libre desarrollo de la personalidad, abarca una genérica “libertad de acción” del individuo para el desarrollo de su personalidad. Por otro lado, la dimensión interna de este derecho brinda protección a “una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal”.[[20]](#footnote-20)

En este sentido, de acuerdo con la Corte, el libre desarrollo de la personalidad, además, brinda protección a un “área residual de la libertad” que permite a las personas invocar su vulneración frente a medidas estatales o actuaciones de terceros que a un determinado "espacio vital" que no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico.[[21]](#footnote-21)

En el amparo directo civil 6/2008, el pleno de la SCJN destaco que el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite “la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo”.[[22]](#footnote-22) De manera tal, que el Estado reconoce el derecho de la persona “a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, controles o impedimentos injustificados”.

Es así como **el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a través del desarrollo jurisprudencial, ha ampliado las libertades protegidas por el orden constitucional frente a las intromisiones injustificadas de terceros y del propio Estado**.

Ahora bien, en el amparo en revisión 237/2014, la Primera Sala de la SCJN sostuvo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que protege la decisión de todo individuo a realizar actividades recreativas o lúdicas sin interferencia de terceros ni del Estado, así como todas las actividades o acciones necesarias para materializar esta elección. Por este motivo, la decisión de ingerir alguna sustancia que afecte los pensamientos, las emociones o las sensaciones de la persona es una decisión que se encuentra protegida por el libre desarrollo de la personalidad. Consecuentemente, **la decisión de consumir cannabis para fines meramente lúdicos en espacios privados y por personas adultas forma parte de este derecho al libre desarrollo de la personalidad *prima facie***.

Como se verá a continuación, **la estrategia de no responder en los tiempos que establecen las disposiciones específicas es una negativa de facto por parte de la COFEPRIS a mi solicitud de autorización para consumo lúdico o recreativo de cannabis y demás conductas correlativas. De igual forma, el juzgador debe considerar que en su caso COFEPRIS negará la solicitud. Ambos supuestos sin duda, resultan un impedimento y una intromisión injustificada a mi derecho al libre desarrollo de la personalidad**.

Yo acudí ante esta autoridad, que en reiteradas ocasiones ha concedido las autorizaciones para uso recreativo de cannabis, con la esperanza de poder ejercer un derecho reconocido y constitucionalmente protegido a consumir cannabis para fines meramente recreativos. No obstante, la COFEPRIS, sigue obstaculizando las solicitudes presentadas y, por ende, continúa obstaculizando el ejercicio de mi derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En razón de lo ya expuesto, la negativa a mi solicitud de autorización, para consumo personal y adulto de cannabis y demás conductas correlativas, por parte de la COFEPRIS, restringe mi derecho al libre desarrollo de la personalidad y contradice la obligación de actuar de conformidad a lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de concederme la autorización respectiva, en contravención del artículo 1° constitucional.

1. **PRUEBAS.**
2. La documental pública consistente en el comprobante de trámite de folio XXXXXXXXXXXX emitido por COFEPRIS, que acredita la existencia de la solicitud de autorización sanitaria que la autoridad no ha resuelto, así como la fecha en que fue presentada (anexo 1).
3. La **documental pública** consistente en el comunicado emitido por la COFEPRIS, en el cual reitera que, a pesar del amparo en revisión 237/2014 resuelto por la SCJN, la marihuana sigue siendo una sustancia ilegal y su siembra, cultivo, cosecha, transporte, venta y suministro está prohibida y penada por dicha Ley, por lo que seguirán negando las autorizaciones que se presenten. <https://www.gob.mx/cofepris/prensa/cofepris-emite-autorizaciones-para-el-consumo-personal-de-marihuana-en-cumplimiento-a-la-sentencia-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion>
4. La **documental pública** consistente en el comunicado emitido por la COFEPRIS el 4 de septiembre de 2018, por el cual indica que, hasta ese momento, ha recibido 534 solicitudes para uso recreativo de cannabis, de las cuales, tan sólo 9 han sido autorizadas por órdenes del Poder Judicial. <https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-atiende-en-el-marco-de-sus-atribuciones-legales-las-solicitudes-para-uso-medicinal-personal-y-ludico-de-la-cannabis-173520?idiom=es>
5. **PETITORIOS**

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este H. Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, en turno, atentamente solicito se sirva:

**PRIMERO.** Tener a esta parte quejosa por presentada según lo argumentado en la presente demanda de amparo y admitirla a trámite, teniendo como domicilio y autorizados al local y personas señaladas al inicio de este escrito.

**SEGUNDO.** Analizar la demanda de amparo y tramitar este juicio en observancia directa de los artículos 1, 4, 25, 103 y 107 constitucionales, interpretados de cara al derecho a la tutela jurisdiccional previsto en el artículo 17 constitucional, y todo ello de conformidad con el artículo 25 de la CADH, de forma que se aplique en nuestro beneficio el principio pro persona y se respete nuestro derecho a contar con un recurso sencillo, breve, accesible y eficaz.

**TERCERO.** Ordenar en la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión la aplicación del estándar más alto de protección, privilegiando la resolución del fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales.

**CUARTO.** Que, con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se nos autorice el uso de medios electrónicos en el interior del local del Juzgado.

**QUINTO.** Hacer uso de la suplencia de la queja por encontrarnos ante un caso cuya Litis de fondo encuadra en el supuesto contenido en el primer párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, en coordinación con los criterios jurisprudenciales vigentes.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**Ciudad de México, México a la fecha de su presentación.**

**Nombre y firma**

1. Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS [↑](#footnote-ref-1)
2. Registro No. 2 016 171 PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO FRENTE A FORMALISMOS PROCEDIMENTALES Y SOLUCIONES DE FONDO DE LOS CONFLICTOS. ÉSTAS DEBEN PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUÉLLOS, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1524. (IV Región)2o.13 K (10a.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Décima Época, Núm. de Registro: 2012981, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 129/2016 (10a.), Página: 1033 [↑](#footnote-ref-3)
4. **ACTO ADMINISTRATIVO DISCRECIONAL. SUS ELEMENTOS REGLADOS.** Décima Época; Registro: 2008759; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 16, marzo de 2015, Tomo III; Página 2316; Materia(s): Administrativa. [↑](#footnote-ref-4)
5. 165344. I.4o.C.220 C. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, febrero de 2010, Pág. 2788: ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN. [↑](#footnote-ref-5)
6. **ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** Novena Época; Registro: 193892; Instancia: Primera Sala; Tipo de tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, mayo de 1999; Página: 285; Materia(s): Penal. [↑](#footnote-ref-6)
7. **GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.** Novena Época; Registro: 174094; Instancia: Segunda Sala; Tipo de tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, octubre de 2006; Página: 351; Materia(s): Constitucional. [↑](#footnote-ref-7)
8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – Artículo 1°: […] *Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.* […] [↑](#footnote-ref-8)
9. Sobre esta cuestión, véase el amparo directo en revisión 1068/2011. Página 25. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sentencia de 6 de enero de 2009, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte. [↑](#footnote-ref-10)
11. **DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.** Novena Época; Registro: 165822; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Tomo XXX, diciembre de 2009; Página: 7; Materia(s): Civil, Constitucional. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sobre este punto, véanse los amparos en revisión 6/2008, 917/2009, 237/2014, 1819/2014 y la contradicción de tesis 73/2014. [↑](#footnote-ref-12)
13. **MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, NO CONTRAVIENE EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.** Novena Época; Registro: 161268; Instancia: Pleno; Tipo de tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, agosto de 2011; Página: 877; Materia(s): Constitucional. [↑](#footnote-ref-13)
14. **DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO QUE LO PREVÉ, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 17 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 23 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.** Décima Época; Registro: 2001903; Instancia: Primera Sala; Tipo de tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2; Página: 1200; Materia(s): Constitucional. [↑](#footnote-ref-14)
15. **CONCUBINATO. LA EXIGENCIA DE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL PARA TENERLO POR CONCLUIDO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN EXCESIVA AL DERECHO AL**LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.Época: Décima; Registro: 2016483; Instancia: Primera Sala; Tipo de tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Página: 1093; Materia(s): Constitucional. [↑](#footnote-ref-15)
16. [↑](#footnote-ref-16)
17. **DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS**. Décima Época; Registro: 2013138; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, 1a. CCLXII/2016 (10a.), Libro 36, noviembre de 2016; Pag. 896. Materia(s): Constitucional. [↑](#footnote-ref-17)
18. **DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.** Décima Época; Registro: 2013139; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Tomo II, 1a. CCLX/2016 (10a.)**;** Libro 36, noviembre de 2016;Pág. 897; Materia(s): Constitucional. [↑](#footnote-ref-18)
19. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. 2013140. 1a. CCLXI/2016 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Pág. 898. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibíd.* [↑](#footnote-ref-20)
21. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. Época: Décima Época; Registro: 2013138, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCLXII/2016 (10a.), Página: 896 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sentencia de 6 de enero de 2009, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte. [↑](#footnote-ref-22)